



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, seis (6) de abril de dos mil veintiuno (2021)**

*Proyecto discutido y aprobado en sala virtual*

Demandante : JULIO CÉSAR ÁNGEL SANTA  
Demandado : ACP – COLPENSIONES; INTEGRAL S.A. y  
TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. -  
Radicado : 05001 31 05 008 2018 00504 01  
Sentencia : S-064

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a dar trámite a los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de las sociedades demandadas y por la parte demandante, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín el día 11 de febrero de 2020.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral primero del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 4 de junio de 2020, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES:**

JULIO CÉSAR ÁNGEL SANTA demandó a las sociedades TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. e INTEGRAL S.A., así como a la ACP COLPENSIONES, pretendiendo sean condenadas a pagar y recibir,

respectivamente, los aportes actualizados de seguridad social en pensiones, así: a INTEGRAL S.A., por el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1981 y el 2 de octubre de 1983; a TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S., por el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 1986 y el 28 de diciembre de 1986. Adicionalmente, solicita se condene a COLPENSIONES a pagarle la pensión de vejez de manera retroactiva desde el 1º de noviembre de 2017, junto con las mesadas adicionales, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación; y las costas y agencias en derecho.

### **LOS HECHOS:**

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 10 de noviembre de 1954, es decir, cumplió 62 años de edad el mismo día y mes del año 2016; que según el reporte expedido por Colpensiones el 9 de agosto de 2018, cotizó 1148.14 semanas al sistema de pensiones, sin que dicha historia laboral refleje el número real de semanas cotizadas. Sostiene que laboró al servicio de la empresa INTEGRAL S.A. en el cargo de Inspector, en el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1981 y el 15 de noviembre de 1985, no obstante, en la historia laboral sólo se reflejan cotizaciones desde el 03 de octubre de 1983 hasta el 26 de noviembre de 1985, existiendo un faltante de 99.14 semanas, concretamente por el periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1981 y el 02 de octubre de 1983.

Que laboró con la empresa TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. en la modalidad de obra o labor contratada por el periodo comprendido entre el 23 de mayo de 1986 y el 29 de diciembre de 1986, existiendo un faltante de 31 semanas debidamente trabajadas. Añade que el día 07 de diciembre de 2016 presentó derecho de petición ante las sociedades demandadas a fin de que se aportaran las constancias de los pagos a la seguridad social, ambas accionadas informaron que, para el tiempo reclamado no era obligación para el empleador la afiliación, tampoco el pago de cotizaciones al entonces Seguro Social, puesto que

aún no habían sido llamadas a inscripción obligatoria para los riesgos de IVM. Agrega que, además, acredita semanas válidamente cotizadas a la AFP PORVENIR S.A. correspondientes al periodo comprendido entre el 1º de julio de 1994 y el 31 de diciembre de 1994, equivalentes a 25.28 semanas, las cuales no se han reportado en su historia laboral.

En igual sentido, manifiesta que en el reporte de semanas cotizadas se tiene que acreditó 1 día cotizado con el empleador CON CONCRETO S.A. por el mes de noviembre de 1998, siendo lo correcto 30 días; para el mes de diciembre de 1998 se le reconocen 0 días, siendo cotizado 1 día; y para el mes de abril de 2006 se reportan 27 días, correspondiendo contabilizar 30 días. Que acredita en total 1308.27 semanas; el 27 de noviembre de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez ante Colpensiones, petición resuelta negativamente por Resolución SUB 296982 del 28 de diciembre de 2017 argumentando que no contaba con la densidad de semanas para ello; por último, indica que realizó cotizaciones efectivas al sistema general de pensiones hasta el mes de octubre de 2017, circunstancia que se refleja en la historia laboral en el mes de agosto de 2018.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:**

Al contestar, INTEGRAL S.A. se opuso a las pretensiones argumentando que para la fecha solicitada en la demanda no existía la obligación de cotizar a pensiones en las zonas donde el ISS no tenía cobertura, por lo cual no hay omisión alguna. Frente a los hechos admite el tiempo de vinculación del demandante con Integral S.A., según las certificaciones adjuntas; que el accionante fue afiliado al ISS el 3 de octubre de 1983; también es cierta la respuesta al derecho de petición denominado "*soportes pago seguridad social*". No le constan los demás hechos, pues se trataban de aseveraciones frente a un tercero. Como excepciones de fondo propuso inexistencia de causa para pedir, irretroactividad de la ley, inexistencia de fundamentos legales y constitucionales para las pretensiones, cobro de lo no debido, vulneración al derecho a la

seguridad jurídica y a la libre empresa, buena fe, incumplimiento al principio constitucional del respecto al acto propio y prescripción.

TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. se opuso a las pretensiones argumentando que no cuenta con soportes documentales de la existencia de la relación laboral, razón por la cual, no se aceptan los extremos de la misma, correspondiéndole a la parte actora demostrar la existencia de los elementos del contrato de trabajo. Frente a los hechos, aceptó la respuesta al derecho de petición presentado ante esa sociedad el 7 de diciembre de 2016 y la resolución del ISS mediante el cual le negó la pensión de vejez al demandante; no le constan los demás hechos. Como excepciones propuso inexistencia del derecho y de la obligación reclamada, inaplicabilidad retroactiva de la norma laboral, nadie está obligado a lo imposible y prescripción.

COLPENSIONES, a su turno, se opuso igualmente a las pretensiones de la demanda porque carecen de fundamentación fáctica y legal. Admite los hechos relacionados con la edad del demandante, el número de semanas reportadas en el sistema de 1148.19 y el contenido de la Resolución SUB 296982 del 28 de diciembre de 2017 por la cual se negó la pensión de vejez. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de recibir aportes a la seguridad social retroactivamente hasta tanto se acredite judicialmente la existencia de la relación laboral, buena fe, inexistencia de la obligación del reconocimiento de la pensión de vejez, imposibilidad de otorgar más de 13 mesadas anuales, improcedencia de los intereses moratorios, improcedencia de la indexación, descuentos en salud, prescripción e imposibilidad de condena en costas.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Mediante sentencia del 11 de febrero de 2020, el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Medellín CONDENÓ, **i)** A COLPENSIONES a liquidar las sumas correspondientes al cálculo actuarial de los aportes

dejados de efectuar por las empresas INTEGRAL S.A. y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S., relacionadas con el tiempo laborado por el demandante - actualizadas de acuerdo con el salario que devengaba - por los periodos comprendidos entre el 28 de octubre de 1981 y el 2 de octubre de 1983 (Integral S.A.); y entre el 23 de mayo de 1986 y el 29 de diciembre de 1986 (Termotécnica Coindustrial S.A.S.). **ii)** A INTEGRAL S.A. y TERMOTÉCNICA S.A.S. a pagar a COLPENSIONES el valor de las sumas liquidadas, por los periodos señalados en el literal anterior y a cargo de cada una de ellas, las cuales deberán efectuar de manera indexada a valor presente, en un término no mayor a 30 días después de que COLPENSIONES notifique las correspondientes liquidaciones. **iii)** A COLPENSIONES, una vez reciba las sumas liquidadas, a expedir la Resolución por medio de la cual reconozca y ordene el pago de la pensión de vejez al demandante, la cual se reconocerá desde el 1º de noviembre de 2017, con base en lo establecido en el artículo 9 de la ley 797 de 2003, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales. Para la liquidación de la prestación deberá darse aplicación a lo dispuesto por los artículos 21 y 34 de la referida ley, que regulan el IBL y la tasa de reemplazo, autorizándose el descuento en salud del retroactivo pensional liquidado, y demás mesadas pensionales que se sigan causando. **iv)** COLPENSIONES reconocerá y pagará, al momento de efectuar el pago de las mesadas pensionales, la indexación de la condena, desde la fecha que se profiere la sentencia y hasta que se haga el pago efectivo de la prestación. **v)** Niega el reconocimiento de los intereses moratorios. **vi)** Condenó en costas a Integral S.A. y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S., fijando como agencias en derecho la suma de \$3.511.212, a cargo de las sociedades demandadas, a prorrata y a favor del demandante.

### **DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN:**

Inconformes con la anterior decisión, los apoderados de las sociedades demandadas y de la parte demandante interpusieron recurso de apelación en los siguientes términos: el **DEMANDANTE:** está en desacuerdo con dejar en suspenso el reconocimiento del derecho hasta

tanto se acredite el pago del cálculo actuarial, pues ello es una carga desproporcionada para el trabajador quien ya se vio obligado a adelantar un proceso judicial para el reconocimiento de sus semanas de cotización, cuando le asiste a la judicatura todas las facultades para ordenar a COLPENSIONES el cobro de estos débitos pensionales por los medios expeditos que la ley ha establecido para la entidad. Cita sentencia SL- 2731 del 11/03/2015, rad 37022 y SL -16086 del 20/10/2015, rad 54226. Por tanto, al trabajador no le puede ser oponible tal situación, pues no debe quedar sujeto a que el empleador acuda o no a dar solución al débito pensional fuente de financiación en su derecho. En consecuencia, solicita se efectué el reconocimiento pensional en concreto, ordenando a Colpensiones el pago del mismo, sin perjuicio de las acciones de recobro que le asiste frente a las empresas condenadas en este caso.

**INTEGRAL S.A.:** la prestación del servicio por el demandante ocurrió entre 1981 y 1983, cuando la Constitución Política era otra. La misma sentencia manifiesta que incluso la norma que prevé la acumulación de cotizaciones para pensionarse viene de la ley 100/94, es decir, una norma posterior a la fecha en que se ejecutó el contrato de trabajo entre las partes. Existen sentencias de la Corte Suprema de Justicia, como la N° 21925 del 22/06/2005 y la del 9/06/2000, rad 13347, donde analizan el mismo tema. La empresa en los años 81 al 83, obró conforme a derecho, y en el expediente está la constancia de que en la zona donde prestaba servicios el demandante, no existía cobertura por parte del Seguro Social. También existe prueba (fs. 114 al 117) de que en esas zonas donde no existía cobertura, el Seguro Social no permitía la afiliación de trabajadores. No se trata de una omisión o de una falta de diligencia de Integral S.A., por cuanto actuó en consonancia con las normas que existían para el momento. No podía tener un cálculo futurista pensando en qué iba a pasar; por eso, otra de las excepciones planteadas y que se retoma en la apelación es la de la seguridad jurídica, pues en ningún estado financiero de ninguna empresa, estaba previsto que trabajadores en zonas de no cobertura, se guardara algún

tipo de reserva actuarial por periodos ya fenecidos en épocas que no correspondían.

Integral S.A. afilió al trabajador en octubre 3 de 1983, en virtud de la Resolución 11002 del 18 de marzo de 1983, la cual da fe de que el Seguro Social, que era el único que reglamentaba lo de pensiones en ese momento, da cuatro opciones al empleador y entre las ellas está que así el trabajador esté en una zona de no cobertura, la empresa PODRÍA afiliar al trabajador a la seguridad social. En este orden, la empresa decide vincular a todos sus empleados a partir del 3 de octubre de 1983 y no se trata que en esa época las empresas se ahorraran el dinero, porque la empresa debía costear la salud de los trabajadores y los riesgos que no podía amparar el Seguro Social. Es importante este tema porque esa era la visión, la empresa debía asumir esas prestaciones de conformidad con las leyes, la jurisprudencia y la constitución existente y en ningún momento, implicaba asumir un cálculo actuarial que no existía, pues fue creado por la ley 100/94.

También apela frente a las costas, pues considera son elevadas entendiendo que en ningún momento la empresa ha actuado de manera negligente; todo lo contrario, ha actuado conforme al derecho en el que se ejecutó el contrato de trabajo tal como se ha manifestado.

**TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S.:** no reconoce el vínculo laboral que manifiesta haber tenido el demandante con la compañía entre el 23 de mayo de 1986 y el 29 de diciembre de 1986. Obedece ello a que en materia de conservación de documentos, las empresas privadas se han visto afectadas por falta de regulación normativa que obligue a las compañías a preservar la información que reposa en la hoja de vida de un trabajador. Solo con la entrada en vigencia de la ley 100/93, nace la obligación de afiliar y cotizar al sistema de pensiones, y con la puesta en práctica del Decreto 1072 de 2015 del Ministerio del Trabajo, surge la obligación de conservar documentos en materia de seguridad social por un periodo de 20 años. Esto lleva a concluir, que

la empresa se ha visto imposibilitada para constatar la autenticidad del documento de fl. 39; así como que quien lo suscribe efectivamente haya sido una persona que se encontrara vinculada con la compañía en dicha época, y que su firma sea auténtica. Acepta que la compañía, en la época en la que afirma haber laborado el demandante, desarrolló un proyecto hidroeléctrico en el Municipio de San Carlos, sin embargo, en consulta elevada por el área de gestión humana al entonces ISS, se obtuvo respuesta el 18 de mayo de 2009, donde dicha entidad informó que la cobertura en ese lugar inició con la entrada en vigencia de la ley 100/93. Por ende, la compañía ha actuado de buena fe, aunado al hecho de que durante dichos periodos, a los trabajadores que estuvieron vinculados a la Hidroeléctrica de San Rafael, no se les realizó ningún descuento de su salario con destino al sistema de seguridad social. Debido a la ausencia de regulación normativa que obligara al empleador a llevar a cabo la afiliación al sistema de seguridad social en pensión, Termotécnica no tiene obligación de reconocimiento y pago de aportes. Ello, además, concordado con la sentencia 39914 del 10 de julio de 2012, Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual dispuso que la obligación del empleador de afiliar al Seguro Social surge cuando se inicia la cobertura por parte del Instituto en el lugar en donde el trabajador prestó su servicio.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:**

En esta instancia, Integral S.A. presentó alegatos de conclusión ratificándose en los argumentos expuestos en el recurso de apelación, e insiste en que los arts. 33 y 115 de la ley 100/93 no se aplican a situaciones ocurridas entre 1980 a 1983, como en el caso del demandante; la vinculación del demandante con la sociedad no se encontraba vigente al momento de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993; además, para la fecha de ejecución de la relación laboral reclamada, no existía la obligación de afiliar a la seguridad social a aquellas personas que prestaran sus servicios en zonas sin cobertura.



La parte demandante solicitó sea confirmada la sentencia frente a la determinación de la existencia de la relación laboral, la obligación de las sociedades demandadas de cofinanciar la pensión a través del pago de los títulos pensionales; insiste en el cumplimiento por parte del demandante de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de vejez, razón por la cual solicita se modifique la sentencia de la A quo, en cuanto a que se ordene a Colpensiones al reconocimiento de la pensión de vejez con autonomía del acatamiento de la condena que deba desplegar las demás partes, puesto que es una carga desproporcionada para el demandante.

Del asunto se conoce asimismo en consulta a favor de COLPENSIONES.

### **CONSIDERACIONES:**

Tres son los temas básicos que debe dirimir la Sala conforme a las apelaciones presentadas y la consulta concedida: (i) si el señor JULIO CÉSAR ÁNGEL SANTA laboró o no al servicio de Termotécnica Coindustrial S.A.S. por el periodo comprendido entre el 23 de mayo y el 29 de diciembre de 1986. Lo anterior puesto que, por parte de INTEGRAL S.A., no se discute la existencia de la relación laboral con el demandante durante el periodo que a dicha empresa le concierne, esto es, entre el 28 de octubre de 1981 y el 2 de octubre de 1983. Una vez resuelto lo anterior, se abordarán las siguientes temáticas en cuanto, (ii) cuál sería la consecuencia de que las empresas codemandadas no hubiesen afiliado al actor a los riegos de I.V.M. y, (iii) en atención a la consulta concedida en favor de COLPENSIONES, así como al recurso de apelación presentado por la parte actora, de ser procedente, se elucidará la condena al pago de la pensión de vejez otorgada por la A quo pero supeditada a la cancelación por parte de las sociedades enunciadas, del cálculo actuarial o título pensional ante COLPENSIONES.

**(i) De la relación laboral con TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S.** Como principio de prueba al respecto se aportó con la demanda, en documento original, certificación emitida por TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL (en ese entonces S.A.) con logotipo de la empresa en la parte superior izquierda y con sello de la misma en el espacio de la firma – sobre la firma -, en el siguiente sentido:

“EL ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
HACE CONSTAR

*Que el señor Julio César Ángel Santa, identificado con cédula de ciudadanía número 14.316.191 de Honda (Tolima), laboró en nuestra Empresa, desde el 23 de mayo hasta el 29 de diciembre de 1986, desempeñando el cargo de Supervisor de Soldadura.*

*El motivo de su retiro se debió a Terminación de la Labor Pactada*

*Medellín, 27 de julio de 2001*

GUILLERMO TORO RINCÓN  
(Fdo.)  
Asistente Administrativo”

Advierte la Sala que el certificado antes descrito se presume auténtico, en los términos de los artículos 244 y 269 del Código General del Proceso<sup>1</sup>, pues no fue tachado de falso por la sociedad TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. en la oportunidad correspondiente, razón por la cual, tiene plena validez como medio probatorio idóneo. Preceptúa el artículo 244, inciso 2º, lo siguiente:

*“Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de*

---

<sup>1</sup> Aplicable por remisión normativa del artículo 145 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social.

*la voz o de la imagen, se presumirán auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso(...)*

Y el artículo 269 ibídem:

*"La parte a quien se atribuya un documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.*

*Esta norma también se aplicará a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aduzca.*

*No se admitirá tacha de falsedad cuando el documento impugnado carezca de influencia en la decisión." (...)*

Adicional a lo dicho, se encuentra un escrito denominado "Contestación Derecho de Petición" (fs. 41 y 42) expedido por TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. aceptado por la parte demandada en la contestación de la demanda, mediante el cual le manifiesta al Sr. JULIO CÉSAR ÁNGEL SANTA, respecto a la afiliación al sistema de seguridad social para el periodo discutido entre el 23 de mayo y el 29 de diciembre de 1986, que para esa época no era obligación del empleador, ni la afiliación, ni el pago de las cotizaciones al seguro social, en razón a que en dicho "municipio (San Carlos-Antioquia) no tenía cobertura". No hizo mención alguna en esa oportunidad respecto de la inexistencia de una relación laboral con el actor.

Esto es, en la suma probatoria, no desvirtuó TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. la presunción de veracidad del certificado laboral en cuestión, por lo que la Sala acoge la existencia del nexo de trabajo habido entre el 23 de mayo y el 29 de diciembre de 1986, que corresponde a las fechas que se pretende probar para efectos del cálculo actuarial.

En lo que atañe a la codemandada INTEGRAL S.A., está claro que la empresa aceptó la existencia de una relación laboral con el Sr. JULIO CÉSAR ÁNGEL SANTA, en total entre el 28 de octubre de 1981 y el 15 de noviembre de 1985, en la que desempeñaba el cargo de Inspector, circunstancia que se corrobora con el certificado obrante a folio 43 del expediente. Asimismo, dicha empresa aceptó la afiliación del demandante al Seguro Social solo a partir del 3 de octubre de 1983 hasta el 26 de diciembre de 1985, con número de afiliación 011332779 y patronales 02014002953 y 02019400005, conforme a la Resolución 01002 de 1983.

**(ii) De los efectos de la falta de afiliación a los riesgos de I.V.M.**

Se parte de la realidad de los siguientes puntos que bien pueden darse por acreditados:

- (i) El demandante laboró al servicio de INTEGRAL S.A. desde el 28 de octubre de 1981 hasta el 15 de noviembre de 1985, y, según lo deducido en precedencia, para TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. entre el 23 de mayo de 1986 y el 29 de diciembre de ese mismo año;
- (ii) durante los periodos transcurridos entre el 28 de octubre de 1981 y el 2 de octubre de 1983, de una parte, y de la otra, entre el 23 de mayo de 1986 y el 29 de diciembre de 1986, el demandante laboró en el Municipio de San Carlos Antioquia, en el cual el Seguro Social no había llamado a inscripción obligatoria al régimen de pensiones, hasta antes de la Ley 100/93 (f. 213);
- (iii) El demandante se afilió en pensiones, por primera vez, al Seguro Social el 29 de agosto de 1974 y cotizó para dicho riesgo hasta el 31 de octubre de 2017, completando un total de 1.148,14 semanas contabilizadas por el Instituto como efectivamente cotizadas; y
- (iv) El demandante nació el 10 de noviembre de 1954 (fl. 13)

En este orden, el punto que origina la discrepancia de las empresas mencionadas - INTEGRAL S.A. y TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S. - tiene que ver con la obligación que pueda generarles la

necesidad de asumir el pago del título pensional, a través del cálculo actuarial por la falta de afiliación a la seguridad social durante aquel periodo en que el actor laboró a su servicio, aún sin que fuera forzosa dicha afiliación por que el Seguro Social no había extendido su cobertura en la zona en que prestó sus servicios, es decir, en el Municipio de San Carlos -Antioquia-.

Esta circunstancia responde al esquema del cubrimiento gradual y zonal de los distintos riesgos por parte del Seguro Social, en tanto originalmente los artículos 193 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo, en consonancia con lo previsto en la Ley 90 de 1946 que estableció el seguro social obligatorio en Colombia, dispusieron la transitoriedad de las pensiones de jubilación, prestación que dejaría de estar a cargo de los empleadores cuando el Seguro Social asumiera el riesgo correspondiente. Esta última circunstancia sucedió, en principio, con la expedición del Decreto 3041 del 19 de diciembre de 1966 - o Reglamento General de los Seguros de IVM -, en virtud del cual el Seguro Social asumió el riesgo de vejez en sustitución de las pensiones de jubilación que correspondían a los empleadores, pero, se reitera, ello se dio en un comienzo sólo en determinadas zonas del país, con extensión gradual de la cobertura, aunque incluso en algunas regiones nunca se llamó a inscripción obligatoria hasta la expedición de la Ley 100/93, que dispuso la integralidad del sistema de seguridad social.

Ahora. Con la Ley 100/93 en virtud de la adopción en Colombia del nuevo esquema de seguridad social integral, vino a instituirse la figura del Bono Pensional, o más concretamente, en lo que interesa a este caso, del título pensional, que corresponde al cálculo actuarial que están obligados a trasladar al Instituto de Seguros Sociales las empresas o empleadores del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones entronizado en la Ley 100/93, efectuaban directamente el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con los trabajadores que seleccionen el Régimen de Prima Media, siempre que el contrato de trabajo estuviere vigente

al 23 de diciembre de 1993, o se hubiere iniciado con posterioridad a dicha fecha.

Lo anterior es coherente con el artículo 115 de la misma Ley 100/93 que describe el bono pensional como aquel aporte destinado a contribuir a la conformación del capital necesario para financiar las pensiones de los afiliados al Sistema General de Pensiones, a los cuales tienen derecho los afiliados que reúnan los siguientes requisitos: **a)** quienes hubieren efectuado cotizaciones al ISS o a las cajas o fondos de previsión del sector público; **b)** quienes hubiesen estado vinculados como servidores públicos al Estado o a sus entes descentralizados; **c)** quienes estuvieren vinculados mediante contrato de trabajo con empresas que tenían a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones, y **d)** los que hubieren estado vinculados a Cajas Previsionales del sector privado o que tuvieran a su cargo exclusivo el reconocimiento y pago de pensiones.

Particularmente el ordinal *c)* acabado de reseñar, se entiende en concordancia con lo normado en el literal *f)* del artículo 13 de la pluricitada Ley 100/93, en armonía con el literal *c)* del artículo 33 en cuanto prescribe que para aquellos efectos, con miras a adquirir el derecho a la pensión de vejez de que trata dicha ley, se tendrá en cuenta *“El tiempo de servicio como trabajadores vinculados con empleadores que tiene a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, siempre que la vinculación laboral se encuentre vigente o se inicie con posterioridad a la vigencia de la presente ley”*.

Esta exigencia se corrobora con el artículo 1º del Decreto 1887/94, que reglamentó lo concerniente a la metodología para el cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deberán trasladar al Instituto de Seguros Sociales las empresas empleadoras del sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, tenían a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con sus trabajadores que seleccionen el RPM con prestación definida, solo a

favor de los trabajadores cuyo contrato de trabajo estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993, o se hubiere iniciado con posterioridad a dicha fecha. (Sobre este punto la Sala volverá más adelante).

En el caso concreto de las sociedades accionadas, se infiere que no afiliaron al trabajador a los riesgos de IVM, no necesariamente por incuria propia, sino porque no estaban forzadas a hacerlo, como lo exponen las apoderadas en el recurso de apelación y en la contestación de la demanda, de suerte que, en realidad, para estos empleadores, según la zona geográfica en que se desarrolló la labor (Municipio de San Carlos –Antioquia, se reitera), la afiliación al Instituto de Seguros Sociales apenas vino a ser obligatoria a partir de la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, y voluntaria, luego de la expedición de la resolución 01002 de 1983 a partir de marzo de 1983<sup>2</sup>.

No obstante lo anterior, en eventos como el del sub lite, la jurisprudencia ha adocinado en diversos pronunciamientos, que aun cuando la falta de afiliación obedezca a la ausencia de cobertura del Instituto de Seguros Sociales, bien frente a la actividad social de la empresa, bien en la zona como aquí acontece, en todo caso se causa la obligación de reconocer y pagar el cálculo actuarial como mecanismo suficiente para lograr la financiación de la prestación que corresponda.

Sobre este particular, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 15 de marzo de 2017, Rad. 47.532, explicó los cambios que ha sufrido la temática en cuestión, en los siguientes términos:

*“Frente a la primera inconformidad se tiene que el tema no ha sido pacífico durante los últimos años. En efecto desde hace más de dos décadas (CSJ SL, 8453 de 1996) y desde entonces hasta el 2014, la Corte fluctuó entre dos criterios; uno, según el cual el empleador no es responsable de la ausencia de aportes para pensión en fecha anterior a aquella en que la cobertura*

---

<sup>2</sup> Razón por la cual el trabajador JULIO CÉSAR fue afiliado voluntariamente por INTEGRAL S.A. por el periodo comprendido entre el 03 de octubre de 1983 y el 26 de noviembre de 1985.

gradual del ISS no alcanzó una zona del territorio nacional y, otro, que en oposición considera que el empleador debe contribuir a la financiación de la pensión de quien le prestó servicios, a través del pago del valor actualizado de las cotizaciones sufragadas.

Sin embargo, en el 2014, la corporación fijó un criterio mayoritario a partir de las sentencias CSJ SL9856-2014 y SL 17300-2014 y, así, abandonó antiguas posiciones en las que se predicaba una inmunidad total del empleador en cuanto entendía que no incurría en omisión de afiliación de sus trabajadores y pago de cotizaciones para cubrir el riesgo de vejez, en aquellas regiones del país en las que no había cobertura del ISS.

Desde entonces, bajo la orientación de los principios constitucionales que propenden por la protección del ser humano que al cabo de años de trabajo se retira del servicio sin la posibilidad de obtener el reconocimiento de la prestación pensional, por causas ajenas a su voluntad y a las del empleador, y en el entendido que el derecho a la seguridad social es fundamental, irrenunciable e inalienable, la Sala por mayoría estimó viable y necesario que los tiempos trabajados y no cotizados, por la ausencia de cobertura del sistema general de pensiones en algunos lugares de la geografía nacional, fueran calculados a través de títulos pensionales a cargo del empleador, con el fin de que el trabajador completara la densidad de cotizaciones exigida por la ley.

Bajo esos derroteros, en la sentencia CSJ SL 9856-2014, luego reiterada en otras, la Sala definió: (i) que no se podía negar que los empleadores mantenían obligaciones y responsabilidades respecto de sus trabajadores, a pesar de que no actuaran de manera incuriosa, al dejar de inscribirlos a la seguridad social en pensiones, (ii) que, en ese sentido, esos lapsos de no afiliación por falta de cobertura, debían estar a cargo del empleador, por mantener en cabeza suya el riesgo pensional, (iii) y que la manera de concretar ese gravamen, en casos «(...) en los que [el trabajador] no alcanzó a completar la densidad de cotizaciones para acceder a la pensión de vejez, [es] facilitar (...) que consolide su derecho, mediante el traslado del cálculo actuarial para de esa forma garantizarle que la prestación estará a cargo del ente de seguridad social".



Así las cosas, una vez demostrada la relación laboral con TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S., e igualmente aceptado el nexo laboral con INTEGRAL S.A., y verificada la omisión de los empleadores a la hora de efectuar los aportes correspondientes derivados de la actividad laboral desarrollada por el demandante a su servicio, surge para éste último el derecho al pago del título pensional que se ha entendido como aquel cálculo actuarial que están obligados a trasladar las empresas o empleadores del sector privado que hubieren omitido la afiliación de sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, sin importar que no hubiere cobertura pues en defecto de ello, eran ellas las encargadas de asumir los riesgos de manera directa, todo con la finalidad de financiar las prestaciones reconocidas en el Sistema.

Luego entonces, se mantendrá la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró responsables a las sociedades codemandadas, de pagar en favor del demandante los cálculos actuariales correspondientes, al periodo comprendido entre el 28 de octubre de 1981 y el 2 de octubre de 1983 laborado con INTEGRAL S.A., y al periodo comprendido entre el 23 de mayo de 1986 y el 29 de diciembre de 1986 laborado con TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S.; y en cuanto ordenó a COLPENSIONES realizar la liquidación respectiva y a recibir el título pensional.

Y no obsta para la anterior decisión, el hecho de que los periodos cuyo cálculo actuarial se pretende fueren anteriores a la vigencia de la Ley 100 de 1993, pues igualmente la jurisprudencia laboral definió el tema, v. gr. con la sentencia SL 3892-2016, Rad. 45.209 del 2 de marzo de 2016, de la cual se extraen los siguientes apartados:

*“En cuanto a la vigencia del contrato de trabajo para el momento de comenzar a regir la Ley 100 de 1993, condición prevista en el literal c) del artículo 33 original de la nueva regulación del sistema integral de seguridad social y reiterada en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, circunstancia no presentada en el caso objeto de estudio, ya esta Corte, recientemente se pronunció en la sentencia SL 2138 de 2016 en el sentido de estimar:*

*...que ese presupuesto de vigencia del contrato de trabajo, en una época determinada, deviene innecesario y contrario a los postulados de la seguridad social que ya se han reseñado, pues la obligación de afiliación es permanente e incondicional, a la vez que encuentra su causa en la prestación de los servicios del trabajador (CSJ SL, 30 Sep 2008, Rad. 33476), sin que en ello influya, en principio, la época en la que se mantuvo vigente la relación laboral.*

*(...) Así las cosas, fuerza concluir por la Sala que el empleador debe reconocer esos tiempos de servicios con el valor correspondiente del cálculo actuarial, en los términos del literal c) del artículo 33 original de la Ley 100 de 1993, el cual se mantuvo igual luego de la reforma introducida por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, sin que deba tenerse en cuenta si el contrato de trabajo estaba vigente o no a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, puesto que esta condición atenta contra los derechos adquiridos, reconocidos no solo de manera genérica en el artículo 58 de la Constitución, sino de forma específica en cuanto a la seguridad social con la reforma introducida al artículo 48 ibídem por el A.L. 01 de 2005, cuando señala que «en materia pensional se respetarán todos los derechos adquiridos». Además, que esta reforma añadió al contenido normativo del artículo 48 superior el principio de efectividad de las cotizaciones y los tiempos laborados.*

Esta confirmación comprende la decisión de denegar la excepción de prescripción propuesta por las codemandadas, pues, en tratándose de expectativas pensionales, de suyo con raigambre constitucional en los términos de los artículos 53 y 48 de la Constitución Política, la posibilidad de hacer valer el pago de un bono o título pensional, con miras a completar el número de semanas necesarias para acceder a la pensión de vejez, es imprescriptible por referirse a un derecho de carácter fundamental. Además, porque mientras pende el reconocimiento de una pensión, no puede hablarse de prescripción de las cotizaciones dejadas de cancelar, pues son ellas las que finalmente van a contribuir a estructurar ese derecho pensional, o, como en este caso acontece, del pago del cálculo actuarial por tiempos laborados y no cotizados, aún sin culpa, como se vio, del respectivo empleador.

**(iii) De la pensión de vejez supeditada al pago por parte de las sociedades enunciadas, del cálculo actuarial ante**

**COLPENSIONES.** En atención a la consulta concedida en favor de COLPENSIONES, así como al recurso de apelación presentado por la parte demandante, igualmente, en términos generales, la Sala comparte el análisis y la decisión de la funcionaria de primer grado. Esto es, el demandante cumplió los 62 años de edad que exigía el artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797/03, el 10 de noviembre de 2016, momento en el cual, según la historia laboral antes del examen de eventuales inconsistencias, acreditaba un total de 1.148 semanas.

A este total habría que sumarle las 26 semanas que corresponden al trámite de no vinculados entre Administradoras de Fondos y que no se reflejan en la historia laboral del demandante, es decir, en este caso, entre PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, reconocidas por la jueza y que corresponden a los meses de julio a diciembre de 1994. Son cotizaciones que fueron debidamente trasladadas a COLPENSIONES, de conformidad con el detalle de aportes girados, expedido por PORVENIR S.A. por la suma de \$5.124.858, visible de fls. 26 a 28 del expediente.

Suman las anteriores 1.174 semanas, a las cuales se adicionan las 134<sup>3</sup> semanas correspondientes a los cálculos actuariales objeto de estas condenas, con lo cual, adquiere el demandante el derecho a causar de la pensión de vejez por reunir de 1308 en toda la vida laboral.

La anterior confirmación incluye la fecha a partir de la cual se reconoce la prestación, es decir, a partir de noviembre de 2017, pues se evidencia en la historia laboral allegada por Colpensiones la novedad de retiro del sistema para el mes de octubre de ese mismo año (fls. 142/148); igualmente se mantendrá la condena por indexación ordenada desde la fecha de la sentencia hasta el pago efectivo de la obligación.

---

<sup>3</sup> Un número de 100.71 semanas con INTEGRAL S.A. y 33.57 semanas con TERMOTÉCNICA COINDUSTRIAL S.A.S.

Ahora bien. En lo que respecta al recurso de apelación presentado por la parte demandante, en cuanto la A quo dejó condicionado el reconocimiento de la prestación hasta tanto se reciba el valor de los títulos pensionales por parte de las empresa objeto de esta condena, será igualmente confirmada la sentencia, pues lo decidido se halla en consonancia con lo normado en el párrafo 1º del artículo 9º de la Ley 797/03, según el cual, *"En los casos previstos en los literales b), c), d) y e) el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional"* (Destaca la Sala)

Por último, discute la sociedad INTEGRAL S.A. el valor determinado por la Jueza relacionado con las costas judiciales. Al respecto se indica que la misma no procede en esta oportunidad, toda vez que como lo señala el numeral 5º del Artículo 366 del Código General del Proceso, la liquidación del monto de las agencias en derecho sólo podrá controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación en contra del auto que apruebe la liquidación de costas, por tanto, la misma se mantendrá tal como la estableció la juez de primera instancia, sin perjuicio de que las demandadas oportunamente puedan pronunciarse al respecto una vez sea proferido el auto de liquidación de costas, después de que el expediente retorne el Juzgado de origen.

Consecuentes con lo anterior, será CONFIRMADA en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Medellín, el día 11 de febrero de 2020.

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica por ESTADOS en los términos del artículo 295 del Código General del Proceso.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 056 del 7 de abril de 2021

**Consultable aquí:**  
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ**  
**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ**  
**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES**  
**MAGISTRADO**  
**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Código de verificación: **15428609bf7ab80a65000a1ae52b06d67bbddc8c962af31ab1bc5323901003a5**

Documento generado en 06/04/2021 02:19:05 PM